AUSTRALIA $1.50 · CANADA $1.50 · FRANCIA 1.00 EURO · ISLANDIA KR100 · NUEVA ZELANDA $2.00 · SUECIA KR10 · REINO UNIDO £.50 · EUA $1.00

EL MILITANTE

ADENTRO

Cómo se acabó 'dividendo de paz' a fines de años 90

—PÁG. 10

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

VOL. 70/NO. 20 22 DE MAYO DE 2006

Protestas por legalización refuerzan a trabajadores

POR RÓGER CALERO

Tras las masivas movilizaciones por los derechos de los inmigrantes en centenares de ciudades el 1 de mayo, el senado estadounidense está preparándose para reiniciar el debate sobre leyes para la "reforma" de la inmigración, sin un acuerdo a la vista. Este debate tiene lugar mientras el zumbido de las discusiones sobre el tema continua en las fábricas, campos y otros centros de trabajo por todo el país. Muchos inmigrantes y otros trabajadores se han sentido impulsados por las recientes marchas y otras acciones de masa para exigir la legalización de los trabajadores indocumentados.

"La marcha nos ayudó a ver nuestra fuerza", dijo Anselmo Mota en una entrevista. Mota trabaja en Stampede Meat, un matadero en el área de Chicago. Mota cree que "esto presiona a los políticos para que nos tomen en cuenta".

En la planta Stampede, los trabajadores informaron que fueron tantos de ellos los que asistieron a la marcha de 400 mil personas en Chicago el Primero de Mayo que la compañía tuvo que detener varias líneas de producción. Aunque los patrones se rehusaron a dar permiso a los trabajadores a que asistieran a la marcha, se sintieron obligados a poner una notificación diciendo que nadie será despedido por haber faltado al trabajo. Hubo un apoyo abrumador para la marcha en la planta, incluso de trabajadores nacidos en Polonia y afroamericanos que no marcharon, dijeron los trabajadores.

En la planta, donde actualmente hay una campaña organizativa para traer al sindicato de la industria alimenticia UFCW, los patrones organizaron reuniones después del 1 de mayo donde le dijeron a los empleados que los sindicatos tenían un historial de no apoyar a los inmigrantes. Esto provocó discusiones entre los trabajadores, quienes notaron que la compañía no les había dado permiso de asistir a la protesta, mientras que los sindicatos habían tenido una participación prominente en la marcha en Chicago.

Un trabajador, quien pidió que no se usara su nombre por miedo a represalias de los patrones dijo que 300 compañeros de trabajo habían firmado una petición pidiendo el día libre para asistir a la marcha. "No les gusta cuando hacemos las cosas juntos", dijo. "No quieren que nos organicemos".

Informes de prensa indican que relativamente pocos trabajadores, aun menos que durante las previas movilizaciones por los derechos de los inmigrantes el 10 de abril, han sido despedidos por asistir a la acciones del Primero de Mayo. "No queríamos que nuestros trabajadores tuvieran que decidir entre la lealtad a la corporación o esta causa de los inmigrantes", dijo al *Wall Street Journal* Dov Charney, dueño de American Apparel Inc. en Los Angeles, al explicar porque su compañía, como muchas otras en el distrito de la costura de la ciudad, decidió cerrar la fábrica ese día.

En el Congreso, los demócratas y republicanos permanecen divididos sobre la producción de una ley que ponga a más de los aproximadamente 12 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos bajo el control de los patrones y el gobierno.

El foco de la primera ronda de protestas por derechos de los inmigrantes fue contra la propuesta de ley Sensenbrenner aprobada por la Cámara de Representantes, la cual convertiría a todos los trabajadores indocumentados en criminales, y en apoyo a alguna de las propuestas que están actualmente ante el Senado y que incluyen el establecimiento de un programa de "trabajadores huéspedes". Sin embargo, desde entonces, muchos trabajadores inmigrantes han empezado a expresar preocupación por los millones que podrían ser descalificados y por otras restricciones que se encuentran en las propuestas.

"¿Qué va a pasar con toda la gente que solo ha estado aquí por un año?", dijo al *Militante* Minerva Ramírez, una empacadora de carne en la Wolverine Packing Co. En Detroit.. Ella dijo que en su departamento, muchos trabajadores nacidos aquí, aunque no todos, han apoyado a compañeros de trabajo, como ella, que se han sumado a las acciones por los derechos de los inmigrantes.

Sudán: EUA presiona por intervención imperialista



Jose Cendon/ AFP/Getty Images

Tropas de la Unión Africana, parte de la operación militar en Sudán, suben a un avión de la Fuerza Area de Estados Unidos el 17 de julio de 2005, en Kigali, Ruanda, rumbo a Dafur.

POR MICHAEL ITALIE

Washington está tratando de usar un "acuerdo de paz" entre el gobierno de Sudán y las fuerzas de oposición en la región de Dafur para abrir el camino a tropas dirigidas por potencias imperialistas en la zona.

El 9 de mayo la secretaria de estado norteamericano Condoleezza Rice fue ante Naciones Unidas para pedir el aceleramiento del despliegue de tropas "pacificadoras" de la ONU a Dafur, una extensa región al oeste de Sudán.

Unos 10 mil soldados de la ONU están ya desplegados en el país como resultado de un acuerdo en 2005 que puso fin a una guerra civil de 21 años entre el gobierno, con base en la mayoría árabe en el norte del país y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán en el sur con mayoría negra. También se encuentran actualmente en el país unos 7 mil soldados de la Unión Africana.

Una creciente industria petrolera centrada en el Golfo de Guinea en Afrecha Occidental ha traído un aumento en la presencia militar norteamericana en la región. En ésta última década Sudán ha emergido como el tercer mayor productor de petróleo en el continente africano.

Miles de trabajadores protestan despidos de empleados públicos en Puerto Rico

POR RON RICHARDS

SAN JUAN, Puerto Rico—Decenas de miles de trabajadores en Puerto Rico han marchado y puesto líneas de piquetes para protestar el cesanteo desde el 1 de mayo de 95 mil empleados públicos. Ese día la administración colonial del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, alegando que se habían acabado los fondos, cerró las escuelas públicas y otras agencias gubernamentales por toda la isla.

El gobierno ha usado los cesanteos y los cierres de servicios públicos para imponer el primer impuesto al consumo en la história de Puerto Rico. El 4 de mayo el senado de la isla aprobó un impuesto de 5.9 por ciento sobre ventas. Como apaciguamiento, también aprobó un nuevo impuesto a las corporaciones con ingresos mayores de 10 millones de dólares.

Para protestar los cesanteos inminentes, muchos sindicatos organizaron una marcha en San Juan el 28 de abril en la que participaron unas 50 mil personas. El Primero de Mayo, varios miles participaron en un mitin bajo una lluvia torrencial, que incluyó contingentes de trabajadores de los sindicatos de la electricidad, maestros y empleados universitarios no docentes En un incidente reportado aquí en *El Nuevo Día* policías golpearon con cachiporras a los manifestantes, hiriendo a dos de ellos en la cabeza, con uno requiriendo atención médica. Han ocurrido posteriormente otras protestas por toda la isla.

El 9 de mayo el sindicato de trabajadores de la electricidad UTIER, Federación de Maestros de Puerto Rico y otros sindicatos realizaron una protesta en los muelles de San Juan, bloquenado el acceso a un gran barco crucero. Masivos piquetes de sindicalistas fueron organizados en centros comerciales en las ciudades de Mayagüez y Ponce.

No obstante, varios sindicatos pospusieron acciones en espera de una prometida resolución del estancamiento en el congreso el 10 de mayo. Esa día se espera que una comisión presente un plan para poner fin a la "crsis presupuestaria". Sus miembros, ninguno de ellos representando a los trabajadores, incluye a un economista, un ex presidente de la Corte Suprema de la isla, un ex director de la oficina fiscal del gobierno y un asistente al presidente del senado.

Tanto el gobernador, como los legisladores han dicho que aceptarían las recomendaciones de la comisión.

El actual conflicto en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos, es parte de un esfuerzo a largo plazo de los capitalistas para resolver la crisis económica a través de medidas de austeridad contra el pueblo trabajador. En los últimos meses el gobierno ha aumentado el precio de los servicios públicos, han presionado a muchos empleados públicos a se jubilen prematuramente y han aumentado el costo en las universidades.

Los partidos gobernantes, el Partido Popular Demócratico (PPD), al que pertenece Acevedo, que está a favor del status de estado libre asociado, y el pro estadidad, Partido Nuevo Progresista (PNP), que actualmente dominan la legislatura, han usado el déficit fiscal

Sigue en la página 11

Juez falla a favor de mineros Co-Op, caso avanza contra 'Militante' y UMWA

POR PAUL MAILHOT

PRICE, Utah—"Las alegaciones de difamación contra los mineros individuales son especiosas e insinceras", escribió el juez federal Dee Benson en su decisión el 1 de mayo desestimando la demanda legal contra 15 mineros de Co-Op levantada por la C.W. Mining Company, los dueños de la mina Co-Op en la cercana localidad de Huntington y la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos (IAUWU), aliada a la compañía.

Benson señaló que las acusaciones de la compañía contra los mineros "parecen no ser más que un intento de intimidar a sus empleados y suprimir una discusión honesta respecto a asuntos laborales". El juez no concedió pago de gastos legales al abogado de los mineros, Richard Rosenblatt.

La decisión por escrito del 1 de mayo del juez reafirmó una decisión verbal anterior desestimando las acusaciones de difamación contra el *Salt Lake Tribune* y el *Deseret Morning News*. Benson sí falló conceder a ambos periódicos pago de gastos legales.

La decisión de la corte permite que la demanda, iniciada hace 19 meses en medio de una dura campaña de sindicalización en la mina Co-Op, continúe contra tres de los demandados, el sindicato minero UMWA, el periódico *El Militante* y la organización Empleos con Justicia de Utah.

El juez uso dos de las 55 páginas de la decisión para presentar sus razones para permitir que continúe el caso contra el *Militante*. Su decisión enfatizó la falta de reportaje "neutral" del *Militante* con respecto a la lucha en la mina Co-Op. "Mientras que el *Salt Lake Tribune* y el *Deseret Morning News* intentaron presentar las posiciones tanto de los mineros como de los propietarios", escribió Benson, "se podría argüir que el *Militante* no ofreció tal foro neutral".

El juez citó un solo ejemplo de un editorial del *Militante* para ilustrar por qué negó al periódico la moción de dimisión del caso.

Benson uso unas cuantas oraciones para también rechazar las mociones de anulación del caso presentadas por el UMWA y de Empleos con Justicia de Utah. Benson dijo que las declaraciones del vicepresidente internacional del UMWA, Mike Dalpiaz, sobre "el tratamiento despiadado de nuestros mineros" por parte de la compañía de carbón, podían haber dañado la reputación de C.W. Mining. "El intento de socavar" escribió Benson "queda enfatizado por la aparente falta de oportunidad que se dio a los que presentan la demanda de refutar esas afirmaciones".

El juez Benson, es el juez principal de la Corte Federal de Distrito en Utah. Fue nombrado a este cargo por el presidente George H. W. Bush en 1991. Benson se graduó de la escuela de leyes de la Universidad Brigham Young y fungió como jefe de personal del senador Orrin Hatch de 1986 a 1988. Tanbién fue abogado en el comité de investigación del caso Irán-Contra en 1987. Según el *Salt Lake Tribune*, Benson es uno de los 11 jueces "miembros de una corte secreta que revisa y aprueba grabaciones y espionaje de contraterrorismo", que fue creada bajo el Acta de Espionaje Extranjero.

Además de estos veredictos sobre las acusaciones de difamación de la empresa, el juez rechazó todas las demás acusaciones levantadas por la C.W. Mining y la IAUWU. La compañía de carbón había acusado a los mineros, al UMWA y a sus partidarios de chantaje y violación de las leyes de inmigración, prácticas laborales injustas, invasión de la privacidad, interferencia intencionada con relaciones económicas, negligencia y conspiración civil.

Apertura a búsqueda de pruebas'

El juez también dijo que permitiría un proceso limitado de búsqueda de información y pruebas como parte de la decisión de permitir que continúe el caso. "Un proceso limitado de obtención de información puede ser necesario para determinar si las declaraciones [supuestamente difamatorias] son verdaderas y si en realidad dañaron a los demandantes", dictaminó. Durante el periodo de descubrimiento, cada lado puede buscar evidencia que le ayude a probar su caso.

Los demandados tienen diez días laborales desde el momento del fallo judicial para responder al juez. Cada cargo en la queja (hay 14 páginas de cargos contra el *Militante*) tiene que ser aceptado o rechazado. Si el cargo es rechazado, se debe de dar una razón. Los abogados del *Militante* dicen que van a pedir más tiempo para responder a los cargos. Una vez que se presente una respuesta, todos los abogados en el caso tendrán 60 días para realizar una conferencia para ponerse de acuerdo sobre los límites de la búsqueda de pruebas y para poner una fecha límite a la duración del mismo y el inicio de la presentación de mociones preliminares para el juicio.

(Aquellos interesados en leer el fallo de Benson, pueden encontrarlo en la página web del *Militante*--www.themilitant.com—bajo el título "Defend labor rights".)

Aproximadamente al mismo tiempo que el juez emitió su decisión en la demanda federal, los abogados de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) se preparaban para una audiencia que comenzará el 16 de mayo en Price, Utah. La audiencia revisaría las objeciones de C.W. Mining a la opinión emitida por el director de la Región 27 de la NLRB Allan Benson, de que la empresa despidió a los mineros por sus actividades sindicales.

Poco antes de una votación sobre la representación sindical en diciembre de 2004, los propietarios de la mina Co-Op despidieron a casi todos los trabajadores que apoyaban al UMWA.

Según una resolución tomada en diciembre de 2005 por el director de la Región 27 del NLRB, los 29 mineros despedidos por supuestas violaciones a la ley de inmigración fueron de hecho despedidos por apoyar "al sindicato y para disuadir a los trabajadores de involucrarse en estas y otras actividades organizadas".

Además, el director del NLRB afirmó que Alyson Kennedy y Guillermo Hernández, otros dos mineros despedidos antes de las elecciones, también fueron despedidos por sus actividades de apoyo al sindicato. La junta laboral concluyó que la C.W. Mining "ha estado discriminado en relación a la contratación, permanencia, términos y condiciones de empleo de sus empleados, desalentando así la afiliación a una organización sindical..."

La NLRB ha especificado que la empresa deberá pagar los salarios perdidos a varios de los mineros despedidos que estuvieron involucrados en actividades de sindicalización desde septiembre de 2003. La NLRB propone que las remuneraciones se basen en salarios de entre 5.75 y 8.25 dólares la hora.

Si prevalecen las resoluciones de la junta laboral en la audiencia del 16 de mayo, mineros involucrados en el esfuerzo sindical en Co-Op dijeron que es muy probable que los votos de 31 mineros despedidos serán contados para determinar si el UMWA o el sindicato aliado de la empresa, la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos, ganaron la representación sindical.

Los ex mineros de Co-Op que participaron en la lucha de sindicalización organizaron una reunión para discutir el veredicto del juez y para prepararse para la próxima audiencia del NLRB. En ella un minero señaló que "nosotros fuimos los que empezamos esto, sin embargo, las organizaciones que nos ayudaron –el sindicato, el *Militante* y Empleos con Justicia—son los que todavía continúan en juicio. Esto es una injusticia. Esto no se da por terminado hasta que no haya demanda contra nadie".

Manifestantes en Toronto exigen justicia para joven filipino muerto por policía



El Militante/Natalie Doucet

TORONTO—Cientos de personas marcharon aquí el 6 de mayo para exigir justicia a favor de Jeffrey Reodica, un joven filipino muerto cuando policías encubiertos le dispararan en la espalda en 2004. "Mi hijo fue ejecutado. No descansaremos hasta que obtengamos justicia", dijo Flora Reodica, madre de Jeffrey, al fiscal.

—NATALIE DOUCET

Puerto Rico: no a despidos

Viene de la portada

de 740 millones de dólares como palo para demandar más medidas de austeridad. En los últimos dos años los dos partidos no han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto.

El gobierno alegó que se le acabarían los fondos si no se aprobaba el impuesto sobre el consumo. Acevedo exigió que se imponga un impuesto de 7 por ciento alegando que este era necesario para obtener un préstamo para pagar los salarios de empleados públicos hasta el 30 de junio, el fin del año fiscal. Legisladores del PNP propusieron un impuesto del 4 por ciento. Los legisladores del menor, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se opusieron a cualquier impuesto sobre el consumo.

Para intentar conseguir apoyo, el PPD organizó una marcha de sus partidarios el 20 de abril alegando que el fracazo a llegar a un acuerdo sobre el impuesto significaría negarles a los trabajadores sus *habichuelas*.

El Senado eventualmente aprobó una propuesta de acuerdo para un impuesto de 5.9 por ciento, el cual Acevedo dijo que apoyaría.

El cierre por parte del gobierno ha afectado a 43 agencias, a 45 mil maestros y 600 mil estudiantes. Miles de residentes se encuentran sin servicios de colección de basura y otros. Niños que dependen de los desayunos y almuerzos escolares han tenido que encontrar comidas calientes de otras formas.

Mientras tanto, la agencia calificadora de riesgo Moody redujo algunos de los bonos del gobierno de Puerto Rico a Junk status.

Tarifas de suscripción y dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde hallar distribuidores del ***Militante*** y de ***Nueva Internacional***, así como una gama completa de libros de Pathfinder.

Primer cambio de política exterior de EE.UU. desde 1991

Cómo se acabó el ‘dividendo de paz’

(Segundo de tres artículos)

POR SAM MANUEL

WASHINGTON—El cambio actual en la política exterior norteamericana y su consecuente transformación de las fuerzas armadas estadounidenses comenzó a fines de la década de los noventa con lo que llegó a su fin el llamado dividendo de paz. Los gobernantes fueron reconociendo que ya no podrían contar con la ayuda de los herederos de Stalin en Moscú de servir de policías de los obreros y campesinos del mundo, tal como lo habían hecho durante el periodo de la Guerra Fría. El imperialismo norteamericano tenía que prepararse para enfrentar más directamente la resistencia del pueblo trabajador a las consecuencias de la creciente crisis capitalista mundial y para enfrentar la competencia más enconada con sus rivales en Europa y Japón.

En este artículo, el segundo de una serie sobre el primer cambio de mayor envergadura en la política exterior de Washington desde el fin de la Guerra Fría, examinamos la lentitud de Washington en reconocer las consecuencias de la nueva correlación de fuerzas de clases a nivel internacional después del fin de la Guerra Fría y en hacer modificaciones para enfrentarla. El primer artículo explica los orígenes de la política de “contención” de Washington del bloque soviético y sus aliados durante la última mitad del siglo veinte. (Ver número del 15 de mayo)

Por casi una década después del fin de la Guerra Fría, con el colapso de los regímenes burocráticos en la Unión Soviética y Europa del este, Washington se comportó como si tuviera menos necesidad de entablar guerras. Durante las sesiones del Congreso sobre el presupuesto del Pentágono de 2007, el secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld dijo que en el periodo posterior a la Guerra Fría de reducción de gastos, estos cayeron al 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En comparación, durante los gobiernos de Eisenhower y Kennedy, estos ocuparon un promedio del 10 por ciento del PIB.

Durante las administraciones de Bush padre y Clinton, el gasto militar fue recortado por casi la tercera parte, unos 135 mil millones de dólares. Al contrario de la mitología liberal, el “dividendo de paz” no liberó fondos para la educación, cupones de alimentos, seguro por desempleo u otros programas sociales. El gasto en cada uno de estos fue reducido durante los ocho años de la presidencia de Clinton. Las discusiones sobre el “dividendo de paz” ocurrieron al mismo tiempo que los gobernantes norteamericanos llevaban a cabo el primer mayor ataque al salario social del pueblo trabajador: la eliminación de la “asistencia social según la conocemos”, iniciada por William Clinton.

Los recortes en el gasto bélico más bien fueron utilizados para ayudar a deprimir las tasas de interés, apuntalar el dólar “fuerte” y llenar los bolsillos de los acaudalados tenedores de bonos. Los multimillonarios norteamericanos tenían la esperanza de poder evitar tener que hacer profundos recortes en la asistencia social que trajese el riesgo de una explosión social.

Tomó casi diez años para que los gobernantes norteamericanos se deshicieran del estado de negación en el que se encontraban sobre el llamado dividendo de paz y para implementar el cambio en su política exterior bajo el lema de librar la “guerra al terrorismo”.

En los últimos 15 años se ha acumulado la evidencia de que el Medio Oriente y Asia central sería el centro de las guerras que el imperialismo librará. Sin embargo, Washington fue lento en reconocer el patrón en la secuela de ataques a instalaciones norteamericanas y de sus implicaciones. Entre estos ataques se encuentran el atentado de coche-bomba en Beirut en 1983 contra un cuartel de Marines norteamericanos que mató a 241 soldados; el atentado dinamitero del World Trade Center en 1993; el atentado con el camión-bomba contra las torres Khobar, uno de los lugares de residencia del personal militar norteamericano en Arabia Saudita en 1996; los atentados dinamiteros a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998; y el ataque al buque de guerra USS Cole en Yemen en 2000.

Fin de política de ‘salir corriendo’

Haciendo un repaso de estos eventos en un discurso pronunciado el 6 de septiembre de 2004, el vicepresidente Richard Cheney dijo que la llamada Doctrina Bush era un ruptura con el curso seguido por un cuarto de siglo, bajo administraciones Demócratas y Republicanas, de responder a ataques “terroristas” como asuntos a ser enfrentados con medidas policiales con el fin de poner a individuos tras las rejas.

Reagan retiró las tropas norteamericanas del Líbano unos meses después del atentado dinamitero en Beirut en 1983. Muchos de los acusados en los otros ataques fueron arrestados, enjuiciados y condenados a muerte o a largas penas en prisión.

“¿Cuáles fueron las consecuencias de estos ataques?” preguntó Cheney en un discurso en Missouri en agosto de 2004. No muchas. “Disparamos unos cuantos misiles balísticos una vez. Fundamentalmente, nos golpearon con impunidad y se salieron con la suya”.

Cheney dijo que bajo la Doctrina Bush cualquier gobierno o individuo que sea considerado protector de “terroristas” será un blanco, y Washington no esperará por otro ataque, sino llevará a cabo acciones militares “preventivas”.

1998: un viraje decisivo

Un momento clave para círculos en la clase gobernante estadounidense en la necesidad de realizar un giro radical en el curso de la política exterior llegó mucho antes de los atentados al World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Revistas conservadoras como el *Weekly Standard*, de William Kristol, y su Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, una fundación conservadora, y centros de investigación como la Fundación Bradley, con sede en Milwaukee, abogaron por una política exterior ‘agresiva’ para dar una nueva forma al Medio Oriente, a través del derrocamiento, cuando sea necesario, de gobiernos de la región considerados como una amenaza a los intereses imperialistas de Washington. Ya en 1997, una historia de primera página en el *Weekly Standard* proclamaba que “Saddam tiene que irse”. Mientras que Kristol y otros, conocidos como “neoconservadores” estaban entre los pioneros de este empuje, el curso hacia el cambio de régimen en Iraq predominó entre la mayoría de la clase gobernante y pronto se convirtió en la política oficial del gobierno. A principios del siguiente año, el *Weekly Standard* publicó una carta firmada por 18 prominentes personalidades capitalistas en donde se instaba al gobierno de Clinton a derrocar al régimen de Saddam Hussein en Iraq. Ocho de los firmaron la carta pasarían luego a ocupar altos puestos en la administración Bush, entre ellos se encontraba el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, el presidente del Consejo de Política de Defensa Richard Perle, John Bolton y Zalmay Khalilzad, actuales embajadores de Estados Unidos ante Naciones Unidas e Iraq, respectivamente, y Richard Armitage, quien se desempeñó como subsecretario de estado entre 2001 y 2005.

En un discurso pronunciado el 18 de febrero de 1998 al Estado Mayor Conjunto, el presidente Clinton dijo que se necesitaba una acción agresiva para lograr que el régimen iraquí de Saddam Hussein no pudiera “desarrollar su programa de armas de destrucción masiva”.

Más tarde ese mismo año, altos congresistas demócratas como John Kerry, Patrick Leahy y Christopher Dodd coauspiciaron una resolución con republicanos tales como Chuck Hagel que exhortaba al presidente para que “tomara todas las acciones necesarias y apropiadas para responder a la amenaza presentada por el rechazo de Iraq de ponerle fin a sus programas de armas de destrucción masiva”.

En los últimos años de su gobierno, Clinton sentó las bases, a través de medidas como la aceleración de la “defensa de misiles”, y allanando el terreno para el uso del ejército dentro de Estados Unidos, para los cambios más radicales en la organización de las fuerzas armadas norteamericanas que fueron implementadas por su sucesor.

“Cambio de régimen” en Iraq pronto se convirtió en la política oficial del gobierno. El 31 de octubre de 1998, Clinton ratificó el “Acta de liberación de Iraq”, que declaraba que: “Debe ser la política de Estados Unidos respaldar los esfuerzos para quitar el régimen encabezado por Saddam Hussein del poder en Iraq y la de promover el surgimiento de un gobierno democrático que remplaze a ese régimen”.

Funcionarios del gobierno de Clinton dejaron claro como sucedería esto, aún después de que George W. Bush entrara en la Casa Blanca. “Estados Unidos no tiene otra opción sino la de invadir el mismo Iraq y eliminar el actual régimen”, escribió Kenneth Pollack en el número de Marzo/Abril de 2002 de la revista *Foreign Affairs*, un año antes de la invasión norteamericana. Pollack era Director de asuntos del golfo en el Consejo de Seguridad Nacional en los dos últimos años de la Casa Blanca bajo Clinton.

Ya para entonces, el 11 de septiembre le había provisto a la mayoría de los gobernantes norteamericanos, liberales y conservadores, con la racionalización para el ataque a Iraq y la más amplia “guerra al terrorismo”.

Esta “transformación” del aparato militar norteamericano con el fin de implementar el curso de la nueva política exterior fue acelerada por el 9/11. La han venido realizando en preparación a lo que los gobernantes norteamericanos describieron recientemente como una “guerra larga” para salvaguardar sus intereses en las décadas venideras.

Cuba, Venezuela, ofrecen ayuda a Bolivia para programas médicos, de alfabetización



Reuters/José Luis Quintana

Miles de personas colmaron la plaza frente al palacio presidencial en La Paz el 1 de mayo para escuchar al presidente boliviano Evo Morales, quien anunció la nacionalizción de las reservas de gas natural del país. El 8 de mayo, en el pueblo occidental de Copacabana, se inauguró un centro oftalmológico, donde se brindará gratuitamente operaciones para quitar cataratas. Es el cuarto de seis centros oftalmológicos que se han creado con la solidaridad de Cuba, la cual ha ofrecido médicos voluntarios y equipo técnico. La ayuda es parte de un acuerdo firmado el 29 de abril entre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia para ofrecerle a ésta ayuda y condiciones favorables de comercio. El tratado es una ampliación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), firmado hace un año entre Cuba y Venezuela. Bajo el pacto, Cuba enviará más médicos y maestros voluntarios a Bolivia. Incluye también el compromiso de apoyar una campaña para alfabetizar a 72 mil bolivianos en dos años, usando métodos empleados anteriormente con éxito en Venezuela. La campaña de alfabetización se hará en español, aymara, quechua y guaraní.

—**PAUL PEDERSON**